

MOVIMIENTOS SOCIALES RURALES COLOMBIANOS: DE LA RESISTENCIA A UNA CULTURA POLÍTICA ALTERNATIVA EN UN MUNDO TRANSNACIONAL

JUAN PABLO BOHÓRQUEZ*
DERMOT O'CONNOR**

La revolución agrícola hizo que el campesinado, del que la mayoría de la especie humana formó parte a lo largo de la historia, resultase innecesario, pero los millones de personas que ya no se necesitaban en el campo fueron absorbidas por otras ocupaciones intensivas en el uso del trabajo, que solo requerían una voluntad de trabajar, la adaptación de rutinas campesinas, como las de cavar o construir muros, o la capacidad de aprender en el trabajo. ¿Qué les ocurrirá a esos trabajadores cuando estas ocupaciones dejasen a su vez de ser necesarias? Aun cuando algunos pudiesen reciclarse para desempeñar los oficios especializados de la era de la información que continúa expandiéndose (la mayoría de los cuales requiere una formación superior), no habría puestos suficientes para compensar los perdidos.

ERIC J. HOBSBAWM (1995, p. 414)

Pero la insistencia en que el bien común es otorgado desde arriba mediante la concesión autoritaria, aseguró que esta filosofía política solo podría ser modificada desde abajo a través de la revolución violenta. Nuevamente, los principios y las prácticas de la democracia fueron pospuestos.

CARLOS FUENTES (1992, p. 153)

* Candidato al doctorado en Ciencia Política de la Universidad Laval, Quebec (Quebec), Canadá. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de Trabajo Social - Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: jubohorquez@unisalle.edu.co, jpablobm@gmail.com.

** Candidato al doctorado en Ciencia Política de la Universidad York, Toronto, Canadá. Correo electrónico: dtoconno@yorku.ca.

En la medida que hay simplemente una interconexión local entre estos pequeños poseedores campesinos y la identidad de sus intereses se engendra en la comunidad, entre ellos ningún vínculo nacional y ninguna organización política, ellos no forman una clase. Ellos son por consiguiente incapaces por sí mismos de imponer sus intereses, sea a través de un parlamento o a través de una convención. Ellos no se pueden representarse a sí mismos, ellos tienen que ser representados.

Su representante tiene, al mismo tiempo, que aparecer como su señor, como una autoridad sobre ellos, como un poder gubernamental que los protege de otras clases y les envía desde arriba la lluvia y el sol.

KARL MARX (1979 [1852], pp. 187-188)¹

Que “lo único que quieren los campesinos es que les dejen en paz” es, una vez más, algo que solo creen los expertos militares. No es verdad. Cuando no tienen comida, quieren comida; cuando no tienen tierra, quieren tierra; cuando son estafados por los funcionarios de una remota capital, quieren librarse de ellos. Pero, sobre todo, quieren derechos como hombres y, cuando son gobernados por extranjeros, librarse de los extranjeros.

ERIC J. HOBSBAWM (1999 [1965], p. 172)

RESUMEN

Los movimientos sociales rurales de Colombia han pasado por una serie de transformaciones que los hacen portadores de proyectos de vida y desarrollo alternativos al impuesto por la ideología neoliberal a escala transnacional. Esta investigación, a través de una aproximación documental y de trabajo de campo relativa a la Asociación de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT), la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA), entre otros, despliega el proceso gracias al cual, en condiciones de guerra interna, estas organizaciones agrarias han logrado plantear una cultura política alternativa. Igualmente, explica los retos a los que se encuentran avocadas en este momento.

Palabras clave: movimientos sociales rurales, cuestión agraria, neoliberalismo, resistencia, identidad.

ABSTRACT

Through a series of transformations, Colombian rural social movements have articulated a development project and a way of life which stand as alternatives to the imposition of neoliberal ideology on a transnational scale. This article presents a review of the literature on agrarian social movements and an analysis based on interviews with activists from four agrarian organizations: the National Association of Peasant Land Users – Unity and Reconstruction (ANUC-UR), the Federation of United Agricultural Trade Unions (Fensuagro-CUT), National Federation of Agricultural Cooperatives (Fenacoa) and the National Agrarian Coordinator (CNA) among others. This study examines the process through which these agrarian organizations have created an alternative political culture

1 Traducción de los autores del artículo.

in domestic conditions of civil war. In addition, the article discusses the ongoing challenges facing these rural social movements at the present conjuncture.

Key words: *rural social movements, the agrarian question, neoliberalism, resistance, identity.*

RESUMO

Através de uma série de transformações, os movimentos sociais rurais na Colômbia têm articulado um projeto de desenvolvimento e um modo de vida que se erguem como alternativas à imposição da ideologia neoliberal em uma escala transnacional. Esta pesquisa, através de uma abordagem documental e trabalho de campo com a “Asociación de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción” (ANUC-UR), o “Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria” (Fensuagro-CUT), a “Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias” (Fenacoa) eo “Coordinador Nacional Agrario” (CNA), entre outros, mostra o processo pelo qual, sob condições de guerra interna, estas organizações conseguiram levantar uma cultura alternativa política agrária. Além disso, o artigo discute os desafios contínuos enfrentados por esses movimentos sociais rurais na conjuntura atual.

Palavras chave: *movimentos sociais rurais, a questão agrária, neoliberalismo, resistência, de identidade.*

JEL: R11, Z13

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales campesinos y agrarios contemporáneos han contribuido, a través de sus luchas, a la restitución y redefinición de los campesinos como agentes de la transformación social. Así, han puesto en cuestión las visiones que los condenaban a la pasividad y a la representación por parte de otros grupos sociales; asimismo, han colocado en entredicho la idea, según la cual, los movimientos campesinos, cuando surgen, buscan el retorno a una edad dorada de prosperidad e igualdad, aparentemente destruida por las condiciones actuales, máxime cuando las condiciones materiales que los sustentan, como al presente, están imbuidas en un proceso de transformación que los condena, irremediablemente, a desaparecer (Blokland, 1995).

Las propuestas y luchas de los movimientos rurales colombianos promueven alternativas de vida y producción que entrañan una redefinición del actual modelo de desarrollo de crecimiento de la producción orientada hacia los mercados globales. Dicho modelo no solo pone en peligro las condicio-

nes de vida y autonomía de los campesinos, sino que, al acelerar los procesos de mercantilización de todos los bienes comunes, amenaza por igual la existencia de la mayor parte de los grupos sociales no dominantes.

Estos problemas, tanto como las respuestas y alternativas a los mismos, pueden ser abordados y pensados a partir del estudio de cuatro movimientos campesinos: la *Asociación de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción* (ANUC-UR), la *Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria* (Fensuagro-CUT), la *Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias* (Fenacoa) y el *Coordinador Nacional Agrario* (CNA)².

Tales movimientos, se caracterizan por su composición social diversa: trabajadores agrícolas, productores cooperativos, campesinos sin tierra, pequeños y medianos productores, entre otros, que padecen y sobreviven en medio de una guerra que condensa los intereses políticos y económicos de las fuerzas sociales nacionales y transnacionales.

² Estas organizaciones no son las únicas en Colombia, pero tienen una presencia social que permite inferir desde ellas las posiciones generales del movimiento social rural colombiano.

El presente artículo aborda, al inicio, los movimientos sociales agrarios a partir de una aproximación a la conceptualización y caracterización histórica de los movimientos sociales campesinos, de su identidad y desarrollo. Enseguida, expone las condiciones estructurales y relaciona los movimientos sociales rurales colombianos y concluye señalando, a manera de balance, los retos que los identifican per se.

METODOLOGÍA

El proceso de investigación de los movimientos sociales rurales se llevó a cabo en dos etapas. Durante la primera, se acopió y revisó información relativa al estado del arte de los movimientos sociales rurales, prestándose especial atención a los trabajos compendiados en las publicaciones seriadas *Journal of Peasant Studies* y *Journal of Agrarian Change*, para lo cual se acudió a las herramientas de la investigación documental y el análisis de contenidos. Durante la segunda, se recopiló información vivencial, de primera mano, a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a diferentes líderes de los movimientos rurales de Colombia.

Los potenciales entrevistados fueron identificados a partir de informes periodísticos, sitios Web de organizaciones y literatura académica, salvo algunos líderes y activistas de los movimientos sociales rurales y las organizaciones colombianas de derechos agrarios que los investigadores conocían personalmente. Una vez cumplida esta labor, se les abordó personalmente, por teléfono, correo o carta donde se les solicitaba concertar una reunión para efectos de la entrevista. En total se realizaron diez entrevistas, las cuales duraron aproximadamente una hora y contenían preguntas abiertas relativas a las metas, visión y táctica o estrategias del movimiento social en particular y, asimismo, respecto de la participación del entrevistado en estos fines y actividades.

En consideración a la ética de la investigación y la minimización de los riesgos de seguridad, se solicitó a cada uno de los entrevistados su consentimiento para grabar, almacenar y utilizar la información (cada entrevista fue grabada y transcrita por uno de los co-autores). Igualmente, se pidió autorización para citar el nombre y organización a la cual se encuentran vinculados. La mayor parte de ellos autorizó la utilización y almacenamiento de la información, mas no que se les identificase explícitamente en este trabajo.

Así, se utilizaron diferentes herramientas de la investigación cualitativa y la revisión documental o “triangulación metodológica”, gracias a la cual se logra una elaboración completa, rica, detallada y densa de los fenómenos sociales, entre ellos, los movimientos sociales (Snow & Trom, 2002, p. 151), y es dado determinar su momento histórico, es decir, su trayectoria y, como parte de la misma, sus condiciones de posibilidad espacio-temporales. Lo anterior bajo la premisa, según lo plantea Carlo Ginzburg (2003, p. 34), que las fuentes “no son ni ventanas abiertas, como lo creen los positivistas, ni muros que obstruyen la vista, como lo sostienen los escépticos: de hecho, son cristales deformantes que es necesario comparar. El análisis de las distorsiones de cada fuente implica ya un elemento constructivo”.

MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS

En el artículo inaugural de la nueva revista *Journal of Agrarian Change*, Henry Bernstein y Terence J. Byres revisan concienzudamente los aportes de otra importante publicación, *Journal of Peasant Studies* (volumenes 1 a 27), con la finalidad de establecer la transición entre los estudios efectuados desde una perspectiva centrada en el campesinado a una complementaria o de relevo que enfatiza en los procesos de cambio tecnológico, formas de hogar, procesos de cambio laboral y de diferenciación de clase, política rural y patrones migratorios, entre otros.

Más allá del enfoque del *Journal of Peasant Studies*, Marc Edelman (2003, p. 187) afirma que la nueva revista se orienta al estudio de las relaciones entre los campesinos pobres y otro tipo de sectores y grupos, por ejemplo, la agroindustria, los movimientos sociales, los bancos, los terratenientes. No obstante, dicha revista expone varios temas cuya pertinencia se evidencia en el estudio de la articulación entre lo local y las fuerzas sociales extra rurales, algo que ya había sido abordado por varios autores en distintos artículos publicados en el *Journal of Peasant Studies*.

Para Bernstein y Byres, la perspectiva impulsada por aquella revista se ubica en la comprensión de los problemas del desarrollo económico y social de los países más pobres, donde el campesinado es un factor esencial de la población, la producción y el poder político, y en conectar y verificar el conocimiento relativo a las formaciones agrarias pre-capitalistas, los caminos del cambio agrario en transición hacia el capitalismo y la dinámica de la transformación agraria –o falta de transformación– en Latinoamérica, Asia y África, por ejemplo, colonialismo y desarrollo/subdesarrollo.

El análisis del papel que jugarían los campesinos en el desarrollo capitalista, y su posible rol en las transformaciones sociales, figura asimismo como tema significativo, e igualmente el esencialismo campesino, puesto que se concibe al campesino como diferente a los proletarios y a los empresarios granjeros cuya actividad agrícola se orienta al mercado. Tal análisis permite, arribar, finalmente, al problema de la transformación del proyecto de desarrollo en virtud de la globalización neoliberal, uno de cuyos blancos será el sector agropecuario (Bernstein & Byres, 2001, pp. 2, 6-7, 30).

Si bien la discusión ha dejado de centrarse en la transición al socialismo, la cuestión sobre el desarrollo, la esencia o identidad del campesinado, la importancia de los factores estructurales en la determinación de la política agraria y la conformación de los movimientos sociales campesinos,

desde lo local, han tomado otras formas y muestran plena validez. Esta vigencia se manifiesta en la definición de la cuestión agraria, generalmente dejada de lado al estudiar los movimientos sociales campesinos transnacionales.

Existe una constante en los estudios que, por lo general, suele figurar de manera explícita y es la siguiente: los campesinos no pueden concebirse más como un grupo cerrado y homogéneo dado que las transformaciones sociales y económicas que afectan al presente a la mayor parte de las sociedades han restado sustento a las antiguas definiciones (entre otras: Shanin, 1976; Wolf, 1966). Dichas transformaciones, a saber, tienen relación con los patrones migratorios, permanentes y estacionales, bien sea internos o internacionales; la mercantilización con diversificación y/o especialización de la producción agrícola; los nuevos patrones culturales, con un grado diferencial de acceso a los medios de comunicación; y la diversificación de la actividad laboral (Edelman, 2003; Rogaly & Coppard, 2003; SinghaRoy, 2004; Webster, 2004). En consecuencia, la misma concepción de movimiento social campesino ha de recoger esas transformaciones. SinghaRoy (2004, p. 33) afirma, en el contexto de la Bengala Occidental (India), que los movimientos sociales campesinos son:

Un esfuerzo organizado por los campesinos pobres (cultivadores de subsistencia y pequeños productores) y la clase trabajadora agrícola (trabajadores agrícolas, arrendatarios, aparceros y artesanos), a través del proceso de formación de una nueva identidad colectiva, para provocar cambios en las estructuras de propiedad, control y uso de la tierra, participación en la estructura salarial de la producción agrícola, sistemas de crédito y apoyo institucional y otros órdenes socioeconómicos de la sociedad que los ha subyugado en un período de tiempo³.

La definición de SinghaRoy evidencia, en primera instancia, lo que es compartido por Marc Edelman (2003), la constitución de los campesinos y de sus movimientos sociales por una serie de grupos so-

³ Traducción de los autores del artículo.

ciales que no pueden determinarse *a priori* porque son el resultado de las circunstancias históricas de una sociedad en particular, en la cual los factores determinantes son el desarrollo del proceso de acumulación y las condiciones económico políticas de cada país; en segundo lugar, señala la construcción de identidad de este grupo y la forma como la interpretan los distintos estudiosos del área; y finalmente, concluye que estos movimientos son impulsados por el objetivo de promover un cambio social vinculado, por lo general, a una concepción de desarrollo. En esto sentido, la identidad campesina puede ser reclamada por diversos productores rurales, incluidos los productores de subsistencia o pan coger, los cultivadores de fincas pequeñas y familiares, los obreros agrarios salarizados, los empleados de la producción agraria industrial y los residentes rurales desplazados a las ciudades.

La cuestión de la identidad de los campesinos, y de sus movimientos sociales (nacionales o transnacionales), se construye y explica, por tanto, en la intersección entre nuevos y viejos movimientos sociales (Eckstein, 2001; Edelman, 1999; Knight, 1990; Prada M., 2002; SinghaRoy, 2004). Los viejos movimientos sociales serían aquellos relacionados con los movimientos de obreros y de trabajadores (en algunos casos también campesinos), cuyas formas organizativas serían altamente burocráticas y jerarquizadas, y cuyos temas de movilización y lucha colectiva estarían constituidos por dos cuestiones principales: la adquisición de ciertas condiciones económicas favorables y las formas de participación e integración política; ambas cuestiones se plantearían, comúnmente, en la formalización de estos logros en términos de derechos. Los medios de acción privilegiados serían políticos y dirigidos a hacia las estructuras de poder formal del Estado. Los nuevos movimientos sociales, por su parte, estarían articulados por nuevos temas, más relacionados con formas culturales y de vida que con cuestiones laborales; sus formas de organización serían redes y asociaciones de base que privilegiarían la acción directa y las innovaciones sociales y culturales en la búsqueda

de sus objetivos sin imbricarse necesariamente alrededor de una clase social considerada como privilegiada para el cambio social (A. Scott, 1990).

La distinción entre estos dos tipos de movimientos es obviada en tanto ambos, en última instancia, tienen como blanco de sus protestas y movilizaciones al Estado, frente al cual buscan definir formas políticas de participación e integración. Lo dicho no significa, empero, que exista una identidad entre ambos; lo que existe realmente es una continuidad en el sentido que “los nuevos movimientos continúan el proyecto de los más viejos de una forma vital: abren la esfera política, articulan demandas populares y politizan temas anteriormente confinados a la esfera privada”⁴ (A. Scott, 1990: 155).

De este modo, la cuestión de la identidad es planteada como elemento constitutivo fundamental de los movimientos sociales campesinos y, por tanto, sería el núcleo articulador de lo político y generaría los elementos de cohesión, la unidad discursiva de un grupo social que se siente amenazado en algún aspecto vital. Para Álvarez *et al.*, el problema de la identidad se resuelve en una cultura de la política, la cual

determina el sentido de las prácticas sociales y, además, cuáles grupos e individuos tienen el poder de definir estos significados. La cultura de la política se ocupa también de la subjetividad y la identidad, porque la cultura juega un papel central en la constitución de nuestra apreciación sobre nosotros mismos⁵ (Álvarez, Dagnino, & Escobar, 1998, p. 5).

Los postulantes de la cultura de la política, a diferencia de los autores ya mencionados, desplazan los factores económicos estructurales, que ocupan el centro en las ciencias sociales, hacia los de identidad, puesto que ellos permiten comprender los movimientos sociales en cuanto su acción social es jalonada, primordialmente, por factores culturales. Las discusiones en torno al significado y contenido de la identidad, bien sea los que se le

4 Traducción de los autores del artículo.

5 Traducción de los autores del artículo.

otorgan desde fuera o los que el grupo social en particular se atribuye a sí mismo, y la construcción cultural alrededor de ciertas coyunturas y temas determinan, en gran parte, tanto la forma en que los actores sociales construyen sus acciones como las vías que toman para su desarrollo. De este modo se plantea un retorno a la vida cotidiana, lugar de producción y reproducción del sistema, pero también de resistencias, de negociación de los sentidos de la vida social (A. Escobar, 1992; J. C. Scott, 1985). No obstante, aún queda por resolver el interrogante relativo a la manera en que lo macro y lo micro se articulan en la constitución de lo político, y cabe anticipar que dicha articulación dependerá, tanto de la naturaleza de los antagonismos como de los espacios y niveles sociales donde se presente la contención.

El énfasis en la cultura de la política, en las formas cotidianas de resistencia, ha sido vivamente controvertido por autores marxistas enfocados, la mayoría de veces, en los procesos campesinos y su constitución de clase (Brass, 2000, 2003; Petras, 1998; Veltmeyer, 1999)⁶. Por consiguiente, el punto central de su crítica radica en la destitución de la conformación de clase del campesinado, lo cual determina una concepción del mismo basada en el reconocimiento de una esencia inmutable que explica por qué hoy día constituye de por sí un nuevo sujeto social con capacidad de transformar las estructuras sociales. Esta esencia habría sido literalmente redescubierta, ya que antes se le consideraba un elemento social retrógrado y culturalmente alienado.

En la nueva perspectiva, el campesinado será empoderado, pero su poder estará limitado a los procesos de transformación social dirigidos hacia la redemocratización y el respeto por las etnias y culturas auténticas, al retorno a formas de pro-

ducción campesinas y a una comunidad ideal. En cierta forma, reviste la forma de una defensa del campesinado en contra de la penetración de relaciones sociales externas en sus comunidades (al igual que en las indígenas). Al desecharse el análisis de la formación de clase de los grupos campesinos, estos son presentados como una fuerza social unida, dotada de la capacidad para redefinir, desde “abajo”, los procesos sociales, pero carente de potencial revolucionario por cuanto las relaciones políticas y económicas no se someten a un análisis que contempla la perspectiva de una sociedad más amplia.

Sin embargo, los movimientos sociales campesinos recientes –continuando con el análisis de clase–, son heterogéneos: en ellos, la distinción urbano-rural se ha difuminado o velado por cuanto sus miembros desarrollan, muchas veces, actividades laborales rurales y urbanas, agrícolas y mineras –este sería el caso, entre otros, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra del Brasil (MST)–. Estos movimientos, además, no permanecen aislados puesto que a través de organizaciones regionales, tales como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), se conectan a foros internacionales –cual es el caso de la Vía Campesina–, donde se comparten experiencias de lucha, y decimos lucha porque así las perciben y presentan sus integrantes. Es precisamente en este tipo de foros donde estarían surgiendo, a juicio de varios autores, una orientación y una práctica de carácter internacional (Veltmeyer, 1999, p. 156).

En contraste, Marc Edelman (1999, p. 50), en su estudio sobre las luchas campesinas contra la globalización en Costa Rica, argumenta que los movimientos sociales campesinos contemporáneos comparten algo de los antiguos y nuevos movimientos sociales porque propenden por cambios en las políticas estatales a la par que se definen como grupos sociales con identidad propia. En Colombia, lo dicho se evidencia en la Asociación de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción

⁶ Estos autores se hallan vinculados a *The Journal of Peasant Studies*, su crítica se dirige a la concepción de los movimientos sociales posmarxistas, posmodernistas, así como a los nuevos movimientos sociales. Bernstein y Byres también estuvieron vinculados a esta revista durante algunos años.

(ANUC-UR), organización que aspira a construir procesos de identidad social campesina, pero presenta problemas para una movilización decidida como consecuencia de la diversidad de su base social.

Las identidades culturales compartidas, en grupos como los campesinos, ayudan a la percepción de motivos de lucha comunes cuyo origen debe buscarse en las condiciones estructurales (Eckstein, 2001). En este sentido, el resurgimiento de ciertas luchas, aun cuando las condiciones se hayan transformado, constituyen, para Edelman y Eckstein, indicios de reservorios sociales (individuos, organizaciones), de visiones del mundo y formas de luchas que imprimirán a las nuevas organizaciones y luchas ciertas características acordes al nuevo contexto.

Los movimientos campesinos deben apreciarse, en consecuencia, no como un esfuerzo de cambio, o de conservación de una identidad, sino como una unidad contradictoria de elementos estructurales (económicos, políticos, sociales) que expresa la filiación u origen de clase de sus respectivos miembros quienes, valga la aclaración, se hallan influidos por elementos culturales. Dichos elementos, empero, no pretenden necesariamente recuperarse del pasado, ni tampoco constituyen identidades amenazadas; son, por el contrario, una construcción en proceso.

Los campesinos y el desarrollo

La profundización del proceso de globalización que afecta al sector agropecuario puede ubicarse históricamente en la ruptura del sistema de Bretton Woods (tipos de cambios fijos, control de movimientos de capital, desaparición del patrón oro, autonomía relativa de las políticas macroeconómicas nacionales, entre otras más) a principios los años setenta (Moral Santín, 2002, p. 128) y la crisis mundial, especialmente la crisis agraria. Este colapso supuso un replanteamiento del problema del desarrollo, que si anteriormente se había cen-

trado en lo nacional, al cabo de la crisis comenzó a pensarse como un proceso de acumulación y crecimiento impulsado transnacional y globalmente. Tal replanteamiento tuvo varias repercusiones, entre las más notorias la reformulación de las políticas estatales relativas al sector agrario, el desmonte del Estado bienestar, el desmantelamiento de las instituciones del sector público que tenían por objeto el sector agropecuario (de crédito y fomento, de asistencia técnica y protección, de mejoramiento de tierras y regadío) y la introducción de programas de reforma agraria, asistidos por el mercado, y de programas de ajuste estructural guiados y coordinados por instituciones financieras multilaterales.

Paralelamente, se sometió a revisión el modelo de desarrollo (nacional) basado en la inversión de capital, tecnología y división internacional del trabajo, porque se asimilaba a una forma de dominación que profundizaba los procesos de colonización y dependencia económica y, por consiguiente, generaba violencia y mayor fragmentación social. (A. Escobar, 1992, 1998). En este sentido, el desarrollo no era más que una construcción, discursiva, ideológica, que condensaba la conjunción de la dominación nacional y la dominación internacional.

Marc Edelman, en particular, critica esta perspectiva posmodernista de los movimientos sociales puesto que no presenta atención a los movimientos campesinos y sus análisis contribuyen a oscurecer las consecuencias, que aumentan la inequidad, del neoliberalismo (y la globalización), al destituir la categoría de desarrollo. A su juicio, también sostienen la construcción del desarrollo, así como el significado que los grupos campesinos le atribuyen a este en tanto mejora de las condiciones de vida (Edelman, 1999, p. 10).

No obstante, los movimientos sociales rurales encontraron diversas estrategias para limitar y reformular el proyecto de desarrollo de la globalización, como hacerse reconocer políticamente por medio de alianzas clave y trabajo en redes, y relevar la reivindicación de los derechos ciudadanos de los

sectores rurales y campesinos a fin de ganarse un espacio en las instancias de negociación de las políticas agrarias nacionales y regionales, políticas, las cuales, se guiaban por una crítica al modelo dominante de desarrollo pues eran los campesinos quienes más estaban padeciendo sus consecuencias negativas.

De este modo, lograron el reconocimiento como interlocutores válidos para la formulación e implementación de políticas agrarias, tanto por los organismos del Estado como por instituciones multilaterales, entre ellas, el Banco Mundial (McKeon, Watts & Wolford, 2004). En consecuencia, puede afirmarse que la articulación de la identidad, tanto como la movilización política de grupos sociales rurales y campesinos, surge en el contexto de cambio social imbricado en las instituciones y cultura política nacionales, en parte a manera de respuesta contestataria contra ciertos elementos del plan de desarrollo nacional, y en parte a partir de alianzas con aliados en el propio Estado nacional. Según señala Edelman, puede colegirse entonces que los movimientos de grupos sociales y campesinos tienen elementos en común con los antiguos y nuevos movimientos sociales. Sin embargo, cabe relevar que la construcción de una identidad campesina, a través de una lucha social endógena a las condiciones sociales y económicas actuales, es un fenómeno único y particular en el ámbito local que tiene que ver con las fuerzas de cambio económico y desarrollo capitalista en el plano global.

LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA Y LOS MOVIMIENTOS RURALES

Si el problema del desarrollo es fundamental para los movimientos sociales campesinos colombianos, se requiere especificar cuál ha sido el modelo de desarrollo modificado por el proceso de globalización. El modelo de desarrollo de la economía

colombiana se asentó en una herencia colonial que determinó las estructuras administrativas del Estado y una separación tajante del campo y la ciudad que hoy en día continúa vigente. El siglo XVIII se desarrolló y alcanzó auge la economía de la hacienda. Ya entrado el siglo XX, la estructura de la tenencia de la tierra afianzó lo que al presente se estima como su rasgo distintivo, el sistema bimodal, es decir, el latifundio de tierras planas (grandes plantaciones comerciales y tecnificadas dedicadas al cultivo de productos comerciales como bananos, café, flores y, recientemente, palma africana) y el minifundio campesino propio de las laderas de las cordilleras. Ambos, en alguna medida, surgieron del proceso de colonización de las tierras bajas que se remonta a la colonización antioqueña de los siglos XVIII y XIX (Bergquist, 1988; Suhner, 2002), la cual determinó un sistema productivo con cuatro vertientes: zonas campesinas, ganadería extensiva, producción comercial y expansión de la frontera agrícola.

En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, parte del desarrollo agrario e industrial se basó en la desposesión y expulsión de campesinos y habitantes rurales hacia las grandes ciudades⁷. Dicho modelo fue apoyado desde principios del siglo XX por las misiones de los organismos internacionales, principalmente las del Banco de Reconstrucción y Desarrollo –años 50 y 70– lideradas por el economista Lauchlin Currie (Brittain, 2005b, p. 37), y su dinámica concuerda con el proceso de expropiación sistemático de los pequeños campesinos cafeteros que tuvo lugar durante el periodo de “La Violencia” (1948-1963), el cual sirvió para consolidar el monopolio de la

⁷ José de Souza Martins (2002) señala que para la comprensión de movimientos sociales brasileños, especialmente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST), se requiere entender el modelo de desarrollo agrario del Brasil, el cual difiere del de la mayoría de los países latinoamericanos en varios sentidos: primero, porque carecía de grandes masas de campesinos que pudiesen expropiarse y proletarizarse y segundo, porque el desarrollo de los latifundios dedicados a los cultivos de exportación se sustentó en un proceso de inmigración y asentamiento internacional de italianos y alemanes, entre otros, aparte de que permitió el surgimiento de una burguesía poderosa.

industria agroindustrial, no solamente cafetera. Además de favorecer las usurpaciones de hecho, abogó por la eliminación de los programas sociales y las tarifas de protección; la reducción de salarios y restricciones a las formas de organización de los trabajadores, elemento que resulta fundamental para comprender algunas de las demandas de los movimientos campesinos. Tales políticas o estrategias del modelo suponían la existencia de un Estado fuerte, es decir, con capacidad para sofocar cualquier resistencia campesina al proceso de reformas antes enunciado (Bergquist, 1988; Brittain, 2005b). La implementación de esta propuesta chocaba sin embargo con uno de los presupuestos básicos del modelo de industrialización de sustitución de importaciones impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es decir, que la producción campesina era más eficiente que la latifundista. Por tanto, se requerían procesos de reforma agraria, asistidos por el Estado, y auxilios para los campesinos y productores agrícolas eficientes.

La visión del desarrollo impulsada por la CEPAL era compartida por un sector reformista de la dirigencia colombiana encabezado por el otrora Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo (1966 - 1970), quien impulsó en 1967 la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)⁸ para materializar la propuesta cepalina. Cinco años después, en lo que se ha tildado con razón de “contrarreforma agraria”, las pretendidas transformaciones del modelo agrario fueron frenadas por un acuerdo, suscrito entre los líderes de los partidos políticos Liberal y Conservador y los grandes propietarios de la tierra, que tuvo lugar en la población de Chicoral, departamento de Tolima. Tal acuerdo concluyó la etapa de reforma agraria asistida por el Estado y dio lugar a la imposición de las políticas monetaristas en el país.

⁸ La ANUC se escindió en los años 70 en un ala independiente y otra gobernista que expresaban la dicotomía del sector agrario. Posteriormente, entre 1979 y 1987, iniciaron acercamientos que concluyeron en la constitución de la ANUC-UR.

El cambio de rumbo en la política agraria estatal, al perseguir la industrialización del campo, contribuyó a acelerar nuevos procesos de desposesión y desplazamiento forzado del campesinado que redundaron en la colonización y ampliación de la frontera agrícola como forma de acceso a la tierra (Farjado Montaña, 2002) y en el crecimiento de un sector obrero agrícola que tendría como una de sus formas privilegiadas de expresión organizativa a Fensuagro-Cut, la cual fue creada al efecto en 1987.

La cuestión agraria

El modelo de desarrollo expuesto supuso un replanteamiento de la cuestión agraria, cuyos matices o variaciones dependían ahora en buena parte de la estructura de cada país o región y, por consiguiente, daba fundamento a algunas de las reivindicaciones más sentidas de los movimientos sociales campesinos e indígenas. En términos sintéticos, la cuestión agraria capitalista parte de que la lógica de la propiedad privada capitalista conlleva una mayor productividad de los factores tierra y trabajo por obra de la inversión intensiva en tecnología y maquinaria y la división del trabajo.

Tales supuestos, en términos generales, sustentan la así denominada “revolución verde” o aquella en que los altos rendimientos agrarios deben ser trasladados del campo a la ciudad para generar el proceso de industrialización. Dicho traslado de valor se efectúa por dos vías, la generación de una acumulación original y la reducción de los precios de los medios de subsistencia (alimentos), especialmente para la fuerza de trabajo, y de algunas materias primas necesarias para la industria, y su estrategia de implementación toma, según pudo observarse para el caso colombiano, distintas formas.

¿Cuáles son, en concreto, las modificaciones a esta cuestión? Los procesos de transformación del capital han producido una generalización de la producción de mercancías concomitante con las inte-

riorización de las relaciones sociales de producción capitalista en la producción agropecuaria, incluida la campesina. Esta, a su vez se halla influida por el lugar de cada país en la división internacional del trabajo y los mercados, y su ubicación en los circuitos transnacionales de capital y mercancías. En consecuencia, las relaciones en el agro, actualmente, no se dan exclusivamente entre las clases agrarias, sino que incluyen una serie de empresas agrícolas que operan a nivel nacional e internacional y se acompañan de un sistema de regulación de las cadenas globales de las mercancías agrarias. Lo dicho significa que el proceso de creación de un sector agrario capitalista no depende ya de la eliminación de la producción campesina y que no existe una cuestión agraria general por cuanto la misma ha devenido en un cuestión de la mano de obra (Bernstein, 2004, p. 199 y ss.).

El problema con esta interpretación de la cuestión agraria es que se reduce a un solo lado de la ecuación. Desde los pequeños y medianos productores, así como desde los campesinos, ambos periodos de la cuestión requieren una reformulación. Hoy día, los distintos movimientos campesinos la plantean o interpretan como “el derecho” de existencia de formas alternativas de agricultura y protección de los bienes comunes de la humanidad (agua, semillas, bosques, tierras comunales), para lo cual se requiere detener e impedir: las formas de expropiación a través de los derechos de propiedad intelectual; la mercantilización de los bienes comunes –y del trabajo– de los pueblos, los que usualmente van acompañados de programas de ajuste estructural; la expulsión de los campesinos de sus tierras a fin de abrir espacio a la construcción de mega-proyectos (represas, enclaves económicos); y la sustitución de las sembradíos y actividades tradicionales (Bohórquez Montoya, 2009). En otras palabras, desde la perspectiva del capital, no se trata de crear en todas partes un sector agropecuario capitalista, por cierto existente; se trata de su ampliación y de la expansión de sus relaciones sociales de producción por otros medios.

En el plano particular, la cuestión agraria se delimita de acuerdo con la historia y la estructura socioeconómica de cada sociedad. Ella ha definido, por ejemplo, los conflictos y las reivindicaciones de los sectores campesinos (incluidos los indígenas campesinos) de Colombia. Antes de mediar el siglo XX, los movimientos sociales campesinos se organizaron en ligas agrarias, apoyadas por partidos de izquierda, entre cuyas principales finalidades figuraban la lucha contra las condiciones miserables de vida en las haciendas (instauración de las relaciones contractuales), la independencia de los campesinos como sujetos sociales y productores, la mejora de las condiciones laborales y permiso para sembrar cultivos comerciales. Tales reivindicaciones podrían resumirse como una cuestión agraria relativa a la abolición de relaciones sociales semi-serviles. Entre los años cuarenta y setenta, las reivindicaciones se aglutinaron alrededor de la exigencia al Estado de prestar servicios públicos (carreteras y facilidades para la producción) y asegurar la libre movilidad y el respeto a sus organizaciones, es decir, la cuestión agraria se determinó con base en exigencias al Estado para que cumpliera su papel en la instauración de condiciones adecuadas a la producción y como de garante de ciertas libertades fundamentales. En las décadas subsiguientes de 1960 y 1970, las demandas al ente estatal incluyeron créditos, reforma agraria y mejoras de las condiciones laborales y salariales y se enmarcaron en la lucha contra la expansión de la agricultura comercial, por cuanto amenazaba la agricultura campesina, y las protestas contra una reforma agraria que legalizaba el monopolio de los recursos excluyendo a los campesinos (Suhner, 2002; Zamosc, 2001). En este periodo, la cuestión agraria se definió en torno a la distribución de los recursos sociales.

En el periodo que cubre las décadas del ochenta y noventa, según Suhner (2002), los campesinos menguaron sus exigencias por la tierra en un contexto de profundización del conflicto armado y la consolidación de los grupos paramilitares. La

acción de los movimientos campesinos se dirigió entonces hacia la reconstrucción de las organizaciones campesinas; la defensa de la economía campesina; la conquista de derechos políticos (derechos ciudadanos y constitucionales) –los cuales fueron recogidos en buena parte en la Constitución Política de 1991 pero no tuvieron aplicación real–; el acceso al crédito; la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas; infraestructura; y paz –en el sentido de detener las expulsiones y migraciones forzosas, las masacres y la sujeción a grupos armados paraestatales. Estas reivindicaciones denotan tanto la continuidad como la ruptura con las luchas establecidas desde principios del siglo XX, porque aspiraban, en última instancia, al reconocimiento de los campesinos como sujetos sociales libres, con iguales derechos que otros ciudadanos y capaces de decidir respecto de su organización social, cultural y productiva. Las luchas campesinas tienen una continuidad más profunda con el pasado de lo que parece a simple vista puesto que evidencian la ruptura con la herencia colonial y la separación tajante del campo y la ciudad, donde el primero es la fuente de los recursos humanos y materiales para los proyectos de sociedad pensados e implementados por otros (García *et al.*, 2009).

Colombia tiene lo que se ha caracterizado como una “estructura agraria trunca” en la medida que jamás ha logrado definirse el papel social, político y económico del sector agrario (Suhner, 2002), pero, primordialmente, por el corte abrupto introducido por las políticas neoliberales desde la década de los años noventa. Este proceso no ha concluido y su resolución no es exclusivamente nacional. Puede afirmarse que el mismo se encuentra mediado por la “integración” de la economía agraria colombiana a través de las fronteras nacionales, en concret, a la economía de Estados Unidos. Y también por la resistencia al “nuevo” desarrollo capitalista, impuesto con reformas neoliberales, la cual es conducida por movimientos sociales tanto nacionales como transnacionales. León Zamosc (2001, p. 111) advierte al respecto que,

de todos modos, el potencial estructural para el malestar social no puede contar por sí mismo toda la historia de la acción colectiva y el conflicto social. El surgimiento de un movimiento campesino requiere más que el agravamiento de los antagonismos agrarios; también necesita lazos organizativos que unan a los campesinos, una fuerte legitimación de las actitudes contenciosas y la existencia de aliados que apoyen y ayuden en la movilización campesina⁹.

La imposibilidad de una lucha abierta, restringe por principio la resistencia a formas cotidianas que difícilmente lograrán vincularse a una organización política debido al control social y la severidad de la retaliación que podrían padecer quienes se involucren (J. C. Scott, 1985, p. 34). No obstante, la movilización continua crea una conciencia que sostiene las organizaciones y logra, a pesar de su desaparición en un momento determinado, que su energía social perdure y sea recogida y articulada, en un futuro, en y por otras instancias organizativas y de lucha (Edelman, 1999; García, *et al.*, 2009; SinghaRoy, 2004; Tarrow, 2005).

Los movimientos sociales en Colombia

Los estudios relativos a los movimientos sociales en Colombia, por lo general, se han enfocado en las consecuencias que sobre los mismos tuvo la Constitución Política de 1991, los aportes y movilizaciones de estos en aras de la paz y sus propuestas de alternativa a la guerra (Cfr. entre otros Archila Neira & Pardo, 2001; García-Durán, 2006; Planeta Paz, 2004). Igualmente, pocos abordan la acción colectiva de los movimientos sociales más allá de las fronteras nacionales. El trabajo de Mauricio Archila (2003), el más reconocido e importante en el tema, se distingue porque realiza el análisis desde una perspectiva focalizada en las distintas etapas y procesos del Estado (sucesiones presidenciales, políticas, entre otros), en su revisión de dos páginas de la literatura científica sobre los movimientos sociales campesinos. El historiador afirma que estos han sido examinados desde la

⁹ Traducción de los autores del artículo.

década de 1980 con el objeto de determinar los procesos de inclusión ciudadana de los campesinos, aunque en su balance final plantea que el punto central en América Latina, incluida Colombia (si bien de manera marginal), es “el despertar de la conciencia étnica campesina, que torna más aún difícil sostener su homogeneidad” (Archila Neira, 2003, p. 394)¹⁰.

Los movimientos sociales rurales reivindican el derecho de seguir viviendo de la tierra como una forma de establecer un tipo de metabolismo con la naturaleza que se encuentre mediado por sus propias necesidades, visión del mundo y proyectos de vida (Bohórquez Montoya, 1997). En un principio, se les denominó *campesinos*, pero en la medida que incluyen grupos, sujetos, objetivos y formas de lucha diferentes a las demandas por la tierra, al presente se nombran *agrarios* o *rurales*, denominación que ratifica el hecho que muchos campesinos han debido emplearse y realizar una serie de actividades empresariales, distintas a las agrícolas, mediante las cuales quedan a merced de otros agentes sociales quienes los explotan (Edelman, 2005). Así, para Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, el concepto de campesino es sociológico y académico, y aunque puede reflejar la realidad, no corresponde a la forma como, generalmente, se definen los habitantes del campo: agricultores, trabajadores rurales, aparceros, entre otros. Asimismo, tampoco da cuenta de las luchas que van más allá de los reclamos por tierras (Stedile & Mançano Fernandes, 2003, pp. 21-22).

El momento presente

A principios de la década de 1990, parte de la sociedad colombiana propuso distintos mecanismos para solucionar el prolongado conflicto interno que ha marcado el devenir histórico del país. Estos mecanismos, así como las concepciones sobre el conflicto mismo, los problemas que se requería solucionar y las fuerzas sociales llamadas a hacerlo, se expresaron en una Asamblea Nacional Constituyente que sesionó durante el primer semestre de 1991 y en la cual estuvieron presentes los representantes de todos aquellos sectores sociales que, supuestamente, podrían determinar los derroteros del devenir social estableciendo las bases materiales de “un pacto social de paz”.

El proceso redundó en la promulgación de una nueva constitución que sancionó un modelo democrático de gestión de la crisis que contiene los siguientes elementos: consagración del sistema económico capitalista; organización democrática de la sociedad –en adelante denominada participativa–; poder constituyente limitado del pueblo; un Estado social de derecho que establece los límites de la acción estatal y un ideal para ser alcanzado por la sociedad colombiana, manifiesto en la garantía de unos derechos fundamentales y otros de alcance progresivo –derechos sociales, económicos y culturales– (Bohórquez Montoya, 2001a). En consecuencia, puede afirmarse que abogó, a través de la consagración de una serie de derechos y garantías, por la inclusión de indígenas, afrocolombianos, campesinos¹¹ y mujeres en el sistema político, inclusión, la cual, se formuló en términos de igualdad social, política y cultural. Además, se consagraron normas generales para resolver, o al menos aminorar los factores que propiciaban la desigualdad económica de estos grupos sociales.

10 Si bien este texto es bastante descriptivo, consideramos que resulta útil para ubicar los procesos estatales y sus relaciones con los movimientos sociales. Otro texto que recoge una descripción sobre los movimientos sociales campesinos colombianos es *25 años de luchas sociales en Colombia: 1975 - 2000* (Archila Neira, Delgado, Prada, & García, 2002). Para este estudio son fundamentales los trabajos de Machado (2004), Suhner (2002), Zamosc (2001), la segunda parte de Archila y Pardo (2001), Chiriboga (1999) y Múnera Ruiz (1998).

11 Durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, y ya en la consagración de las normas constitucionales, las demandas campesinas quedaron subsumidas entre las de otros sectores sociales, mientras que las reivindicaciones de las comunidades indígenas y negras se trataron como temas separados.

Cabe relevar que tal modelo se fundamentó en el presupuesto implícito –en un periodo de reestructuración neoliberal de la economía colombiana¹² y latinoamericana (generalmente circunscrita a la llamada globalización) de gran interdependencia política y económica con respecto de los llamados países desarrollados (Dabène, 1997; Petras & Veltmeyer, 2005)– según el cual la crisis y el conflicto podían resolverse por obra de un acuerdo interno entre los colombianos. No obstante, más de dos décadas después de la promulgación de esta constitución se ha juzgado que este proceso fue fallido, pues no se consideraron las fuerzas “externas” que estaban moldeando, en un proceso contradictorio, la sociedad colombiana, ni tampoco aquellas “internas”, altamente beneficiadas por el modelo socioeconómico y político vigente¹³ (Bohórquez Montoya, 2001b). Entre las últimas –para el caso del sector agrario– y menos propensas a cualquier cambio estructural figuraban el sector financiero y los grandes propietarios de tierras de Colombia (Brittain, 2005b; Zamosc, 2001) y en las primeras, igualmente interesadas en mantener las estructuras sociales prácticamente tal cual –sin incluir a los organismos multilaterales, la banca mundial y algunos Estados– se encontraban las grandes corporaciones multinacionales del agro (Friedmann, 1982; Richani, 2005). Así, las disposiciones constitucionales y algunas modificaciones por ellas propiciadas, básicamente en el sistema de justicia y electoral, no alteraron fundamentalmente la “exclusión” de los campesinos, trabajadores agrarios y pequeños propietarios del sistema político y del acceso a los recursos para desarrollar sus actividades económicas.

12 Si bien en la década del noventa se sintió con especial intensidad la aplicación del modelo neoliberal en Colombia, este modelo tiene sus antecedentes en los años veinte y cuarenta, en las misiones Kemmerer y en las misiones Currie de los años cincuenta y setenta (Brittain, 2005b; Kalmanovitz, 1986). En otras palabras, como ya lo ha señalado Edelman (1999), el neoliberalismo solo ha podido triunfar en las medidas que el Estado bienestar keynesiano generó las condiciones de crecimiento económico industrial y educativo y otra serie de servicios complementarios.

13 Igualmente estuvieron ausentes los dos principales grupos rebeldes armados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Muchos de estos grupos sociales excluidos han creado una serie de organizaciones que propenden por la defensa de sus intereses. Los movimientos sociales campesinos que hicieron lo propio en las décadas del sesenta y setenta, han luchado por transformaciones sociales y económicas que han alterado, según se estima, “tanto la evolución política como el desarrollo económico [colombiano]” (Bergquist, 1988: 19).

Puede aseverarse que el espacio político colombiano no sufrió una transformación radical con la reforma constitucional de 1991; los factores que propiciaban su cierre, por el contrario, se han agudizado desde entonces. Un mayor constreñimiento del espacio político y social se ha visto favorecido no solo por las reformas neoliberales y la globalización, sino por el surgimiento y consolidación de un proceso de contrarreforma agraria (paramilitar y del narcotráfico)¹⁴ que se sustenta en lo que William Stanley (1996) ha denominado “the protection racket State”¹⁵. Este Estado se caracteriza por el uso desproporcionado, pero discriminado, de la violencia contra los sectores sociales opuestos a él, o sus proyectos, con el objetivo de lograr no solamente la contención de estos sectores sino la meta de obtener concesiones políticas y económicas por parte de las élites. El anterior proceso ha sido abordado en una abundante literatura científí-

14 En 1972, la firma del “Pacto del Chicoral” (Tolima) puso fin a los intentos previos de reforma agraria “confiscatoria” y abrió los procesos de contrarreforma. Ya en las décadas de los ochenta y noventa se impulsó desde los organismos internacionales una reforma agraria basada en adquisiciones de la tierra a precios de mercado; la última llevó a una contrarreforma por parte de los bancos e instituciones crediticias, pues comenzaron a confiscar las tierras de los campesinos que no podían pagar los distintos créditos (e intereses) obtenidos para el ejercicio de sus actividades agropecuarias. Desde los mismos años ochenta también se viene impulsando una contrarreforma agraria paramilitar que busca la acumulación de tierras no solamente para la producción, sino en tanto que activo autovalorizador, como fuente de estatus social y, generalmente, como terrenos de “recreo” de los nuevos poseedores y propietarios (Bohórquez Montoya, 2007, 8).

15 “Estado protector ilegal”. El sentido de la palabra racket (del inglés) usado por Stanley, es difícilmente colmado por el equivalente español: ilegal. Quizá se presta para mayor confusión. Una interpretación de los procesos de seguridad y de la transformación del Estado colombiano, sustentado en parte en el trabajo de Stanley, puede encontrarse en el trabajo de Jairo Bedoya (2010).

ca relativa a las causas y condiciones de la guerra en Colombia; asimismo, en una profusa literatura sobre los movimientos sociales y cívicos, cuya óptica busca captar las alternativas a la guerra y las iniciativas de paz que estos movimientos vienen impulsando, por ejemplo, la semana de la paz que se lleva a cabo en el mes de septiembre desde 1988, e igualmente, el impacto de los cambios constitucionales en los movimientos sociales (cfr. entre otros: Archila Neira & Pardo, 2001; CINEP, 2003; García-Durán, 2006; Planeta Paz, 2004).

Las organizaciones campesinas

Si bien el cierre relativo del espacio político ha contenido relativamente parte de las acciones colectivas de los movimientos campesinos y agrarios colombianos (Prada M., 2002), esto mismo, aparentemente, ha propiciado que los movimientos sociales busquen alternativas de organización, lucha y reformulación de sus propias reivindicaciones.

Entre las organizaciones del movimiento social rural colombiano pueden destacarse ANUC-UR, Fensuagro, Fenacoa y CNA. Hablar de ellas conlleva referirse a una serie de organizaciones que actúan con unos objetivos, estrategias y formas de acción particulares, y logran individualmente, mediante un proceso complejo, presentarse como unidades relativamente coherentes y unificadas. Se puede argumentar que es posible vislumbrar, a partir de los componentes sociales –con su historia particular–, los puntos que permitirán o entorpecerán la coherencia del movimiento rural en su conjunto.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) es un movimiento constituido por campesinos sin tierras, campesinos desplazados (tanto aquellos que residen en áreas rurales como en las grandes ciudades colombianas), y pequeños y medianos propietarios (poseedores hasta de 30 hectáreas de tierras y las cuales son trabajadas generalmente por la fuerza

de trabajo familiar)¹⁶. Actualmente, la organización aboca un proceso de escisión¹⁷ resultante, entre otras causales, del enfrentamiento de dos visiones frente al trabajo campesino: desde las bases hacia los dirigentes o desde los dirigentes a las bases. El segundo es el que ha primado en la ANUC-UR y la ha llevado a actuar en los últimos años más como una organización no gubernamental que como un movimiento social u organización del movimiento social. Esta problemática ha estado históricamente presente en el movimiento campesino colombiano y especialmente en la ANUC. En parte, la constitución de la ANUC-UR, en 1987, intentó resolver esta problemática al optar por un trabajo menos burocrático y más desde las bases campesinas (Múnnera Ruiz, 1998), pero la misma volvió a reproducirse al interior en la medida que la actividad de organización y movilización en las distintas regiones se volvió más difícil por el desarrollo de la guerra.

En 1987, la ANUC-UR surgió de un largo proceso o serie de intentos por reunificar a los campesinos que habían formado parte de la ANUC, la cual, como ya se expuso, fue creada como parte del esfuerzo del Estado colombiano por contener la expansión de los latifundios sobre terrenos baldíos, ampliar la pequeña y mediana propiedad, fortalecer al interior del campesinado la unidades de producción familiar e impulsar el modelo de

¹⁶ Comunicación personal con Fredy Meneses Fuente, antiguo dirigente de la ANUC-UR y actual dirigente de la Coordinadora Interregional Campesina (Bogotá, D.C., marzo 28 de 2008). La CIC permitió la constitución de la Asociación Popular Campesina (Asocampo) en el año 2008. De acuerdo con Darío Fajardo Montaña, la estructura de la tenencia y distribución de la tierra en Colombia determina que quien sea propietario de 0 a 5 hectáreas es un "muy" pequeño propietario; entre 5 y 20 hectáreas, un pequeño propietario; y entre 20 y 50 hectáreas, un mediano propietario (Fajardo Montaña, 2002, p. 22).

¹⁷ Este proceso de ruptura ha dado a lugar a otras organizaciones campesinas. La ANUC-UR conserva aproximadamente un 10% de los miembros de la antigua organización y tiene presencia, fundamentalmente, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Cundinamarca. El 90% restante se ha vinculado a otras organizaciones. Es de destacar que Asocampo surgió de este proceso de crisis.

desarrollo agrario tipo “granjero”¹⁸. El papel de la ANUC, según esta concepción, sería el de servir de herramienta para llevar a cabo la reforma agraria, ya intentada en varias oportunidades y cuya meta principal era la de propiciar la redistribución de la propiedad rural en beneficio de aparceros, arrendatarios y campesinos sin tierra (Múnera Ruiz, 1998, p. 242 y ss.)¹⁹. No obstante, el incumplimiento de los compromisos del Estado, el aumento de la represión estatal y la suspensión de la personería jurídica a distintos componentes de la Asociación, radicalizó a un sector del movimiento. Esta situación, aunada a la presencia de distintas fuerzas y corrientes políticas (Estado colombiano, movimientos marxistas-leninistas, representantes del Partido Comunista Colombiano, trotskistas, entre otros), dio lugar al cisma y languidecimiento del movimiento desde mediados de 1972²⁰.

18 Esta reforma agraria ha sido catalogada por un analista de “superficial”, en la medida que no alteró, en términos fundamentales, la concentración de la tierra, pero sí fomentó una división cada vez mayor entre el sector agrícola comercial moderno y el campesino tradicional. Este modelo de reforma agraria fue implementado, en América Latina, en Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay, y contó con el impulso y apoyo de Estados Unidos; sus resultados fueron la creación de una serie de instituciones de apoyo y fomento, con grandes nóminas burocráticas, que en última instancia no contribuyeron positivamente al desarrollo de la propia reforma agraria (Arruda Sampaio, 2005, pp. 16-17).

19 En la declaración de principios promulgada en su primer congreso (julio 7 a 9 de 1970), la ANUC se refiere a sí misma como organización *autónoma* frente al gobierno sin desconocer, por ello, el apoyo brindado por este para su constitución. En el mismo tenor, la III Junta Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (reunida en Villa del Rosario de Cúcuta, Norte de Santander, junio 5 de 1971) señaló, en la Plataforma Ideológica, que la organización era un ente independiente del Estado y los partidos políticos y resaltó su composición social: campesinos pobres, asalariados, pequeños y medianos propietarios que abogaban por una reforma agraria integral y democrática (C. Escobar, 1983, pp. 14, 23).

20 Las diferencias al interior de la ANUC, las cuales se habían hecho patentes ya desde el mes de enero de 1972, siguieron agudizándose en el transcurso del año hasta originar dos grandes corrientes –posteriormente se darían otras divisiones– al interior de la organización: la Línea Armenia, que representaba alrededor de unos 10.000 campesinos y cuya posición era cercana al Estado, rechazaba la violencia como forma de lucha y se manifestaba conforme con una cooperación, juiciosa y responsable, pero autónoma respecto del gobierno nacional; la Línea Sincelejo, que representaba a unos 300.000 campesinos, era más crítica con el Estado en tanto promovía la canalización de las demandas campesinas a través de la organización, denunciaba los vínculos existentes entre la

En el proceso de unificar al campesinado en torno a la ANUC-UR participaron muchas organizaciones que luego se separaron, como fue el caso de Fensuagro. Cabe resaltar, sin embargo, uno de sus grandes logros, como lo fue la consecución de una mayor independencia, tanto política como económica, del movimiento campesino frente al Estado. Por tanto, en el congreso de Unidad y Reconstrucción de la ANUC que daría lugar al nacimiento de la ANUC-UR se afirmaba lo siguiente:

era claro que los intereses con que fue creada la Anuc (sic) por parte del Estado chocaban con los reales intereses del componente social de la organización campesina, que es de campesinos medianos y propietarios y campesinos pobres, minifundistas, la mayoría de ellos sin tierra para trabajar (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, 1987, p. 7).

Otro elemento era la formulación de un programa, cuyo principal eje comprendía la lucha “por una verdadera reforma agraria que cambie las relaciones de poder terrateniente dadas en Colombia y las relaciones de producción marginal”; la defensa de la economía campesina; la diversidad en la producción, tanto en lo que se produce como en la forma en que se produce” (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, 1987, p. 49 y ss.).

La ruptura con el Estado dio al movimiento campesino una identidad de clase y ya no de usuarios de los servicios del Estado (Múnera Ruiz, 1998, p. 289). No obstante, la ANUC-UR contaría con dos factores adversos. De una parte, su programa y el desarrollo de sus luchas no reflejaban los intereses y reivindicaciones de otros sectores del campesinado –generalmente excluidos de las definiciones de los campesinos (Cfr. Wolf, 1966)– como los pescadores, mineros (comúnmente artesanales), artesanos y trabajadores agrícolas asalariados²¹.

situación del campesinado nacional y el sometimiento de las clases dominantes al imperialismo norteamericano y asumía la consigna “tierra para el que la trabaja” (C. Escobar, 1983, pp. 38-49). Dicha Línea terminó luego escindiéndose en seis facciones más (Tobasura Acuña, 2005, p. 69, nota final No. 4).

21 Comunicación personal con Gustavo Alturo y Luis Peña, dirigentes de la Asociación Popular Campesina (Bogotá, D.C., abril 3 de 2010).

Por otra parte, las transformaciones del régimen político nacional afectaron al movimiento campesino en su conjunto: al cerrarse el ciclo de La Violencia, se desdibujaron, en apariencia, las diferencias ideológicas entre los partidos políticos de las clases dominantes como resultado del consenso bipartidista o Frente Nacional (1970-1986) para la dominación compartida, el cual se caracterizó por un predominio de la coerción directa. Esta coerción, unida a la integración del tráfico ilegal de drogas a las instituciones, la constante violación de los derechos humanos, la consolidación de los grupos paramilitares, la profundización neoliberalismo, el fracaso de los distintos procesos de paz con los movimientos insurgentes y las limitadas reformas institucionales no solo ahondaron la crisis de legitimidad del Estado (Bedoya, 2010; Bohórquez Montoya, 2001a; Múnera Ruiz, 1998, pp. 474, 478-479), sino que, paralelamente, ahogaron en gran parte al movimiento campesino y sus organizaciones.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT) emergió de un proceso de fusión de distintos sindicatos de trabajadores agrarios con fuerte presencia en los departamentos de Cundinamarca, Guaviare, Arauca, Cauca, Tolima, Huila, Atlántico, Nariño, Meta, Quindío, Boyacá y Bolívar. Dicha federación se fundó en 1974 bajo el nombre de FENSA (Federación Nacional de Sindicatos Agrarios) y entre sus objetivos figuraban la democratización de la propiedad de la tierra; la adquisición, defensa y avance de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; y la reforma agraria (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, 2004, p. 158).

Aunque sus fines han mudado desde entonces, el VIII congreso de esta organización planteó como programa bandera la soberanía y seguridad alimentaria de Colombia; una reforma agraria radical; el reconocimiento de la importancia de la economía campesina, indígena y de las distintas comunidades rurales (atravesadas por diferencias étnicas) para la economía nacional; la defensa de los derechos obreros; y la instauración de una

democracia real y participativa en Colombia (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro, pp. 21-25). Cabe relevar que dicho programa incluía la “voz objetiva y subjetiva” de mujeres y jóvenes y contemplaba una salida al conflicto armado interno (Brittain, 2005a, p. 2).

Su base social está compuesta fundamentalmente, según se dijo ya, por trabajadores agrarios agrupados en distintos sindicatos –muchos de los cuales se encuentran ubicados en las zonas de agricultura comercial de exportación– y asociaciones agrarias y campesinas. Igualmente, Fensuagro tiene presencia en algunas juntas de acción comunal y preside la Asociación de Reservas Campesinas. Asimismo, incluye entre sus filas a pequeños y medianos agricultores y trabajadores de la industria agrícola de las flores, los bananos, el café y la caña de azúcar de 22 de los 32 departamentos colombianos. Según algunas estimaciones, cuenta aproximadamente con 80.000 miembros (Brittain, 2005a, p. 2). No obstante, para Héctor Mondragón, asesor de esta organización, su presencia real está circunscrita a 12 departamentos (Mondragón Báez, 2002a, 2002b), lo cual implicaría un menor número de afiliados, agrupados en 37 sindicatos y siete asociaciones. Esto se explicaría no solo por causa de su presencia limitada y problemas organizativos, sino por el desarrollo de la guerra desde el Estado, el cual ha determinado como uno de sus principales blancos a los movimientos sociales campesinos.

El Coordinador Nacional Agrario (CNA) está conformado por campesinos minifundistas que exigen una solución a la crisis agraria y no encontraron respaldo en otras organizaciones sociales y tiene presencia en los departamentos de Tolima, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño y el Macizo colombiano (Mondragón Báez, 2002a, p. 11). Su propuesta de lucha engloba temas cruciales como la soberanía y autonomía alimentarias, o derecho de cada pueblo para determinar autónoma y soberanamente la producción agroalimentaria; la redistribución de tierras, tanto en beneficio de

los campesinos sin tierra como de los pequeños y medianos propietarios –distribución la cual debe realizarse al interior de la actual frontera agrícola para así desalentar los procesos de colonización–; la definición de territorios campesinos; la legalización de los cultivos ilícitos en aras de su aprovechamiento medicinal e industrial; la resolución del conflicto armado interno a través de la negociación política –lo que obligaría a modificar el modelo de desarrollo vigente a fin de hacer valer y cumplir los derechos económicos sociales y culturales consagrados en la Constitución Política de 1991–; el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales en marco político democrático; el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a través de relaciones armónicas entre el ser humano y la naturaleza y con garantía del equilibrio ecológico, social y cultural; y la equidad y fortalecimiento de la perspectiva de género (Coordinador Nacional Agrario (CNA), 2005, pp. 4-6).

La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa)²² es una organización con miembros en dos frentes: los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima, donde se presenta un modelo de producción campesina que convive con latifundios dedicados a la ganadería, y las zonas de colonización. Agrupa a cooperativas agrarias y campesinas, cuya base social está compuesta por organizaciones de trabajadores agrarios y su programa propende por el establecimiento de un modelo de economía solidaria para el campo colombiano (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC, 2004, pp. 161-162; Mondragón Báez, 2002b, p. 27).

Puede afirmarse en suma, y de modo provvisorio, que ninguna de estas organizaciones del movimiento rural colombiano reviste un carácter nacional, ni por su presencia ni por su impacto territorial. La conjunción de las cuatro es la que logra imprimirles un sello distinto al regional o local, lo cual

²² Fenacoa atravesó por un prolongado proceso de crisis que comenzó con el asesinato de varios de sus dirigentes nacionales y estuvo a punto de disolver la organización durante el año 2007.

no niega el hecho que cada una posee dirigentes nacionales y una sede central en Bogotá.

Asimismo, sus programas y luchas coinciden en diferentes aspectos con los de la Vía Campesina Internacional, lo cual sirve para tipificarlas a la vez como movimiento social tradicional (luchas por servicios, infraestructura, entre otros) y nuevo movimiento social por cuanto tienen una mayor conciencia de los problemas globales y sus luchas, aparte de ser más amplias, se hallan menos centradas en el propio grupo (Tobasura Acuña, 2005, pp. 61, 65).

Las relaciones de estas organizaciones del movimiento social campesino colombiano han pasado por procesos tanto de competencia como de complementariedad entre sí. Es importante mencionar, sin embargo, antes de proseguir, que el referente de todas ellas ha sido la ANUC, pues fue gracias al proceso de su surgimiento, desarrollo y posterior “desintegración” que se crearon las condiciones para la génesis y consolidación de otras organizaciones del movimiento campesino.

Los procesos de complementariedad se han dado en las luchas, las cuales no conllevan una alianza directa sino mediada, generalmente, por otras organizaciones campesinas o sindicales. Así por ejemplo, en el Consejo Nacional Campesino (CNC), que agrupa a 11 organizaciones del movimiento social campesino, se encuentran presentes Fensuagro, ANUC-UR y Fenacoa mas no el CNA (Mondragón Báez, 2002a, 2002b). En la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) se encuentran presentes todas las organizaciones rurales mencionadas en este apartado, a excepción de la ANUC-UR²³.

²³ Las relaciones entre las organizaciones dependen de la coyuntura particular. Tan solo el Mandato Agrario ha logrado agrupar, al menos temporalmente, a la mayor parte de las organizaciones sociales campesinas. Héctor Mondragón (2002a, 2002b) ha elaborado una síntesis de estas relaciones que no es posible detallar en el presente artículo.

La competencia entre las organizaciones sociales, por su parte, comprende varios aspectos, en principio, el acceso a los recursos económicos del Estado nacional, en sus distintas divisiones político-administrativas, y las ONG. Esta competencia obedece asimismo a razones ideológicas y a los distintos énfasis de los programas y proyectos cada cual. Es notoria la diferencia, por ejemplo, entre el programa de Fensuagro-Cut, que resalta el papel de los trabajadores agrícolas como parte de la clase obrera tradicional²⁴, y el de la ANUC-UR, el cual enfatiza en los campesinos sin tierra y los pequeños propietarios. También existe competencia por áreas de influencia y captación de miembros. En palabras de algunos dirigentes campesinos, las relaciones entre las organizaciones campesinas son las de "Judas. Muy buenos amigos por encima, pero en el fondo no"²⁵.

De otra parte, las relaciones de los miembros de estas organizaciones con el Estado, en el nivel central, son de oposición y confrontación (Archila Neira, 2002; Múnera Ruiz, 1998) porque lo consideran directo promotor del modelo de desarrollo y las políticas neoliberales que han determinado las formas actuales de configuración del modelo agroexportador de la agricultura comercial capitalista, modelo que, según se explicó, se basa en la expropiación y expulsión del campesinado de sus tierras y la explotación intensa de la mano de obra agrícola (Brittain, 2005b). Esto no significa, empero, que no se hayan presentado períodos de negación con el Estado, o que este deje de verse como una fuente de recursos económicos de vez en cuando. Es ante todo en el nivel local donde las organizaciones que componen cada una de estas otras organizaciones compiten por recursos, bien sea de financiación de proyectos, obtención de servicios domiciliarios, acceso a fondo de desarrollo y crédito, o por el aval para acceder a otros

programas y servicios ofrecidos por el Estado en el orden regional o nacional²⁶. Lo que es innegable es que las relaciones con este han estado mediadas, a lo largo de su existencia, por los partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador.

La obtención de recursos y el acceso a bienes y servicios implican, por lo general, relaciones de compadrazgo, cacicazgo y gamonalismo (Guillén Martínez, 1996). Por tanto, no resulta extraño que la mayor parte de estos se encuentre afiliada a una u otra agrupación política. Tal situación da lugar a un juego en que los movimientos ejercen oposición a nivel central, mientras en el nivel local desarrollan actividades y negociaciones con el Estado (*ibidem*). Esta ambivalencia obliga a los movimientos a asegurarse de que los compromisos de sus miembros particulares no conlleven obligaciones o pongan en peligro al conjunto (Gledhill, 2000, p. 189).

Las relaciones de estos movimientos con las ONG se hallan mediadas por una dinámica parecida a la establecida con el Estado. La diferencia está en el nivel central, donde las grandes ONG –usualmente internacionales– tienen sus grandes sedes y se compite por los recursos. En el ámbito local, por el contrario, suelen participar en sus programas y tomar parte en sus actividades. Esto explica por qué una buena parte del movimiento social colombiano, incluido el campesino, haya adaptado sus programas y estrategias a las líneas de financiamiento de las ONG, lo cual ha sido óbice para acusar a varias organizaciones de la pretensión de dirigir a los movimientos e imponerles sus directrices.

Perspectivas de los movimientos rurales colombianos

En el apartado anterior se pudo observar, parcialmente, el complejo panorama de las organizaciones sociales rurales. No obstante, según señaló el Encuentro Nacional de Unidad Popular de la Coalición

24 Esta fue una de las razones por las cuales Fensuagro se afilió en 1987 a la Central Unitaria de Trabajadores.

25 Comunicación personal con dirigentes campesinos que pidieron que no se mencionaran sus nombres ni organizaciones (Bogotá, D.C., junio 15 de 2010).

26 *Ibidem*.

ción de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (4 a 6 de junio de 2010, Bogotá, D.C.), el movimiento social rural colombiano enfrenta una serie de retos enmarcados en un estado de conflicto, impunidad y olvido que se ha prácticamente perpetuado en el país por obra de los tres últimos gobiernos: los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno actual de Juan Manuel Santos. Tales retos son los siguientes:

1. Fortalecer las organizaciones y movimientos sociales campesinos con opción de resistencia, acción y lucha alternativa para Colombia, hoy representada por la Asociación Campesina Popular (Asocampo), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), El Concejo Nacional Agrario (CNA), la Federación de Sindicatos Agrarios (Fensuagro), la Asociación Campesina de Colombia (ACC) y la Asociación de Mujeres Indígenas y Campesinas de Colombia (Anmucic), entre otras. Todas estas organizaciones, valga la aclaración, han venido siendo estigmatizadas, sindicadas, perseguidas y judicializadas, tanto por sus oponentes como por el Estado.
2. Mantener e incrementar la coordinación nacional e internacional. Las organizaciones y movimientos sociales campesinos vienen participando y fortaleciendo coordinaciones nacionales, continentales y mundiales como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la CLOC nacional y continental y la Vía Campesina Mundial, todas las cuales pretenden globalizar la resistencia y la lucha con la esperanza transformadora de una Colombia, una América y un mundo mejor y posible para el campo.
3. Construcción colectiva de nuevas propuestas. Las organizaciones y movimientos sociales campesinos plantean la construcción colectiva de una propuesta de paz y una democracia integral, estable y duradera que fructifique en:

- Una solución política al conflicto social y armado en Colombia.
- El establecimiento de un gobierno nacional democrático.
- El desarrollo de una reforma agraria integral que distribuya la tierra entre quienes la trabajan y garantice servicios agropecuarios y sociales dentro de una política nacional de desarrollo sostenible del campo colombiano.
- La defensa y el fortalecimiento de la economía campesina.
- El desarrollo de una política de soberanía territorial y alimentaria.
- La construcción de vida digna a través de planes de desarrollo territorial.
- La producción agroecológica campesina de alimentos.
- La defensa de la geodiversidad y la biodiversidad (Alturo, Peña & Bohórquez Montoya, 2010).

CONCLUSIONES

La identidad campesina-agraria colombiana se conjuga como un “nuevo” movimiento social que lucha en contra de la explotación capitalista, la violencia estatal y la corrupción de las clases dirigentes del Estado. Es un nuevo movimiento campesino –en la era de globalización neoliberal y transnacionalización de la producción agrícola– que comparte las preocupaciones de los movimientos sociales clásicos, la democratización de la producción agraria y del sistema político nacional. La intersección de las necesidades e intereses de los diferentes grupos rurales subordinados les ha permitido formular alianzas y discursos en común para enfrentar la modernización de la economía nacional impuesta por el modelo neoliberal transnacional. Tal modernización ha llevado la internacionalización de la producción agrícola, la

redefinición de las líneas de conflicto social rural y, por ende, las características mismas de la cuestión agraria en Colombia. Los movimientos sociales rurales colombianos continúan su lucha por la justicia y el cambio social, políticamente viable, en medio de una creciente represión social y son al presente artífices y portadores de un modelo de desarrollo y una cultura política, aún en ciernes, todo lo cual ha redundado en la transformación de las acciones, las luchas y la misma cultura de la resistencia a formas positivas y propositivas que evidencian la necesidad de formular un proyecto social alternativo, fundado en un desarrollo rural pacífico y justo.

Referencias

Comunicaciones personales

Comunicación personal con dirigentes campesinos que pidieron que no se mencionasen sus nombres ni organizaciones. Bogotá, D.C., abril 15 de 2010.

Comunicación personal con Fredy Meneses Fuente, antiguo dirigente de la ANUC-UR y actual dirigente de la Coordinadora Interregional Campesina. Bogotá, D.C., marzo 28 de 2008.

Comunicación personal con Gustavo Alturo (antiguo dirigente sindical urbano y miembro actual del Consejo de sabios y sabias de ANUC-UR) y Luis Peña (dirigente regional de la CIC en la costa Atlántica, departamento de Magdalena). Bogotá, D.C., abril 3 de 2010.

Participación

Encuentro Nacional de Unidad Popular de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia. Bogotá, D.C., 4 a 6 de junio de 2010.

BIBLIOGRAFÍA

ALTURO, G.; PEÑA, L. & BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (2010). Perspectivas del Movimiento Campesino Colombiano Joao-de-Barro (en imprenta).

- ÁLVAREZ, S. E.; DAGNINO, A. & ESCOBAR, A. (1998). Introduction: The Cultural and the Political in Latin American Social Movements. En S. E. Álvarez, A. Dagnino & A. Escobar (eds.), *Cultures of Politics/Politics Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*. Boulder, Colorado/Cumnor Hill, Oxford: Westview Press. 1-29.
- ARCHILA NEIRA, M. (2002). Balance de 25 años de luchas en Colombia. *Conclusión 25 años de luchas sociales en Colombia: 1975 - 2000*. Bogotá: CINEP. 241-253.
- ARCHILA NEIRA, M. (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICANH, CINEP.
- ARCHILA NEIRA, M.; DELGADO, Á.; PRADA, E. & GARCÍA, M. C. (2002). *25 años de luchas sociales en Colombia: 1975 - 2000*. Bogotá: CINEP.
- ARCHILA NEIRA, M. & PARDO, M. (eds.). (2001). *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- ARRUDA SAMPAIO, P. (2005). La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada. OSAL: *Observatorio Social de América Latina*, VI(16), 15-22.
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC. (1987). *JDe pie! y con ganas de echar p'abajo: Ponencias y conclusiones del Congreso de unidad y reconstrucción de ANUC*. Bogotá: Asociación de Usuarios Campesinos - ANUC.
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC. (2004). *Memorias: XI Congreso ANUC*. Bogotá: ANUC.
- BEDOYA, J. (2010). *La protección violenta en Colombia. El caso de Medellín desde los años noventa*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación (IPC).
- BERGQUIST, C. (1988). *Los trabajadores en la historia latinoamericana: Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia* (G. I. Núñez, trad.). Bogotá: Siglo Veintiuno.
- BERNSTEIN, H. (2004). 'Changing Before Our Very Eyes': Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today. *Journal of Agrarian Change*. 4(1-2), 190-225.
- BERNSTEIN, H. & BYRES, T. J. (2001). From Peasant Studies to Agrarian Change. *Journal of Agrarian Change*, 1(1), 1-56.
- BLOKLAND, K. (1995). Peasants Alliances and 'Concertation' with Society. *Bulletin of Latin American Research*, 14(2), 159-170.
- BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (1997). La técnica como disposición del mundo. *Texto y Contexto*. (32), 139-187.
- BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (2001a). *Concepciones políticas en la Constitución de 1991*. Medellín: Cooimpresos.
- BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (2001b, 20 de julio). Diez años de fracaso constitucional, *El Otro*. 21.
- BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (2007). *CEUDES presencia y transformación social en el sur del Tolima*. Bogotá: CAFOD, CEUDES. 31.
- BOHÓRQUEZ MONTOYA, J. P. (2009). Los pequeños pasos de la expropiación campesina. *Infoagro Net*. Recuperado de http://www.infoagro.net/shared/docs/a2/Exprop_campesinado_colombiano_cinep.pdf
- BRASS, T. (2000). *Peasants, Populism and Postmodernism: The Return of the Agrarian Myth*. London; Portland: Frank Cass.
- BRASS, T. (2003). Latin American Peasants -New Paradigms for Old? En T. Brass (ed.), *Latin American Peasants*. London; Portland, Or.: Frank Cass. 21, 1-40.

- BRITTAINE, J. J. (2005a). FENSUAGRO: Organic Class-Consciousness in Rural Colombia. Recuperado 21 de agosto, 2010, de <http://www.colombiajournal.org/colombia205.htm>
- BRITTAINE, J. J. (2005b). A Theory of Accelerating Rural Violence: Lauchlin Currie's Role in Underdeveloping Colombia. *Journal of Peasant Studies*. 32(2), 335-360.
- CHIRIBOGA V, M. e. a. (1999). *Volver los ojos al campo*. Santafé de Bogotá: CINEP; ALOP; ILSA.
- CINEP. (2003). Sistema de información CINEP. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular. 12.
- Coordinador Nacional Agrario (CNA). (2005). Propuesta política del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. Bogotá: Coordinador Nacional Agrario (CNA). 6.
- DABÈNE, O. (1997). *La région Amérique Latine: interdépendance et changement politique*. Paris: Presses de Science Po.
- ECKSTEIN, S. (2001). Power and Protest in Latin America. In S. Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements* (2a. ed.). Berkeley; Los Ángeles; London: University of California Press. 1-60.
- EDELMAN, M. (1999). *Peasants against Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*. Standford: Standford University Press.
- EDELMAN, M. (2003). Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks. In M. Kaldor, H. Anheier & M. Glasius (eds.), *Global Civil Society 2003*. Oxford: Oxford University Press. 185-220.
- EDELMAN, M. (2005). Bringing the Moral Economy back in... to the Study of 21st-Century Transnational Peasant Movements. *American Anthropologist*. 107(3), 331-345.
- ESCOBAR, A. (1992). Culture, Economics, and Politics in Latin American Social Movements Theory and Research. En A. Escobar & S. Alvarez (eds.), *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview Press. 62-85.
- ESCOBAR, A. (1998). *La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo* (D. Ochoa, Trans.). Santafé de Bogotá: Norma.
- ESCOBAR, C. (1983). *Trayectoria de la ANUC*. Bogotá: CINEP.
- FARJADO MONTAÑA, D. (2002). *Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: Comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro. *Memorias del VIII Congreso de Fensuagro*. Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, República de Colombia - Fensuagro.
- FRIEDMANN, H. (1982). The Political Economy of Food: The Rise and Fall of the Postwar International Food Order. *The American Journal of Sociology*, 88(Supplement: Marxist Inquiries: Studies of Labor, Class, and States). 248-286.
- FUENTES, C. (1992). *El espejo enterrado*. México: Fondo de Cultura Económica.
- GARCÍA-DURÁN, M. (2006). *Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003*. Bogotá: CINEP.
- GARCÍA, M. C.; DELGADO, Á.; BOHÓRQUEZ, J. P.; ARCHILA, M.; SARMIENTO SANTANDER, F.; CARABALLO, V.,... CADENA, A. (2009). Informe especial: La protesta social 2002-2008: En cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez. Bogotá: CINEP. 20.
- GINZBURG, C. (2003). *Rapports de force: histoire, rhétorique, preuve* (J.-P. Bardos, trad.). París: Gallimard - Le Seuil.
- GLEDHILL, J. (2000). *Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics*. London: Pluto Press.
- GUILLÉN MARTÍNEZ, F. (1996). *El poder político en Colombia*. Santa Fe de Bogotá: Planeta.
- HOBBSAWM, E. J. (1995). *Historia del siglo XX 1914-1991* (J. Faci, J. Ainaud & C. Castells, trad.). Barcelona: Grijalbo Mondadori.
- KALMANOVITZ, S. (1986). *Economía y nación: una breve historia de Colombia*. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores.
- KNIGHT, A. (1990). Historical Continuities in Social Movements. En J. Foweraker & A. L. Craig (eds.), *Popular Movements and Political Change in Mexico*: Lynne Rienner. 78-102.
- MACHADO, A. (ed.). (2004). *La academia y el sector rural*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- MARTINS, J. d. S. (2002). Representing the Peasantry? Struggles for/about Land in Brazil. *Journal of Peasant Studies*. 29(3-4), 300-335.
- MARX, K. (1979 [1852]). The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte Karl Marx - Frederick Engels Collected Works. New York: International Publishers. 11, 99-197.
- McKEON, N.; WATTS, M. & WOLFORD, W. (2004). *Peasant Associations in Theory and Practice*. Geneva: Civil Society and Social Movements Programme, United Nations Research Institute for Social Development.
- MONDRAGÓN BÁEZ, H. H. (2002a). Colombia: ¿Reforma agraria o mercado de tierras? Recuperado 1 de diciembre, 2010, de <http://www.rebelion.org/plancolombia/mondragon250902.pdf>
- MONDRAGÓN BÁEZ, H. H. (2002b). *La organización campesina en un ambiente de terror*. Bogotá: ILSA.
- MORAL SANTÍN, J. A. (2002). Globalización y transformaciones financieras. ¿El fin de las políticas macroeconómicas nacionales? *Zona Abierta* (92/93), 127-173.
- MÚNERA RUIZ, L. (1998). *Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. Santa Fe de Bogotá: CERECC; Universidad Nacional de Colombia.
- PETRAS, J. (1998). The Political and Social Basis of Regional Variation in Land Occupations in Brazil. *Journal of Peasant Studies*, 25(4), 124-133.
- PETRAS, J. & VELTMAYER, H. (2005). *Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London; Ann Arbor [Mi]: Pluto Press.
- PLANETA PAZ (ed.). (2004). *Movimientos sociales y transformaciones populares en América Latina*. Bogotá: Planeta Paz.
- PRADA M., E. (2002). Luchas campesinas e indígenas. 25 años de luchas sociales en Colombia: 1975 - 2000. Bogotá: CINEP. 123-166.
- RICHANI, N. (2005). Multinational Corporations, Rentier Capitalism, and the War System in Colombia. *Latin American Politics & Society*. 47(3), 113-144.
- ROGALY, B. & COPPARD, D. (2003). 'They Used to Go to Eat, Now They Go to Earn': The Changing Meanings of Seasonal Migration from Puruliya District in West Bengal, India. *Journal of Agrarian Change*. 3(3), 395-433.

- SCOTT, A. (1990). *Ideology and the New Social Movements*. London: Unwin Hyman.
- SCOTT, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven; London: Yale University Press.
- SHANIN, T. (1976). *Naturaleza y lógica de la economía campesina* (H. G. Trejo, trad., vol. 129). Barcelona: Anagrama.
- SINGHA ROY, D. K. (2004). *Peasants Movements in Post-colonial India: Dynamics of Mobilization and Identity*. New Delhi; Thousand Oaks: Sage Publications.
- SNOW, D. A. & TROM, D. (2002). The Case Study and the Study of Social Movements. In B. Klandermans & S. Staggenborg (eds.), *Methods of Social Movement Research*. Minneapolis; London: University of Minnesota Press. 146-172.
- STANLEY, W. (1996). *The Protection Racket State: Elite, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*. Philadelphia: Temple University Press.
- STEDILE, J. P. & MANÇANO FERNANDES, B. (2003). *Brava gente: La lucha de los Sin Tierra en Brasil. Entrevista a Joao Pedro Stedile* (E. Pérez, trad. 4a. ed.). Bogotá: Desdes Abajo; Fundación América Latina.
- SUHNER, S. (2002). *Resistiendo el olvido: Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia*. Bogotá: Taurus.
- TARROW, S. (2005). *New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- TOBASURA ACUÑA, I. (2005). Las luchas campesinas en Colombia en los albores del siglo XXI: de la frustración a la esperanza. OSAL: *Observatorio Social de América Latina*. VI(16), 59-70.
- VELTMAYER, H. (1999). New Social Movements in Latin America: The Dynamics of Class and Identity. *Journal of Peasant Studies*. 25(1), 139-169.
- WEBSTER, N. (2004). *Understanding the Evolving Diversities and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization*. Geneva: Civil Society and Social Movements Programme, United Nations Research Institute for Social Development.
- WOLF, E. R. (1966). *Peasants*. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice-Hall.
- ZAMOSC, L. (2001). Peasant Struggles in the 1970s in Colombia. En S. Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements* (2a ed.). Berkeley; Los Ángeles; London: University of California Press. 102-131.

